

4

SEGURIDAD, ¿A QUÉ COSTO? DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES CIVILES

Azucena Cháidez¹ y Edgar Valle²

La aprobación y desaprobación de la estrategia del gobierno en el combate al narcotráfico es uno de los temas que permanentemente se discuten. Dependiendo de la coyuntura y a cinco años de iniciada la guerra contra el narcotráfico, las críticas hacia esta estrategia se hacen más o menos evidentes, más o menos reiteradas, se politizan, se enmascaran de recetas académicas, o sencillamente disminuyen. Sin embargo, más allá de su manifestación mediática, está claro que dentro de la diversidad que existe en nuestro país pueden hallarse posturas encontradas de aprobación y desaprobación frente a esta estrategia entre el grueso de la ciudadanía que no cuenta con un acceso privilegiado a los medios.

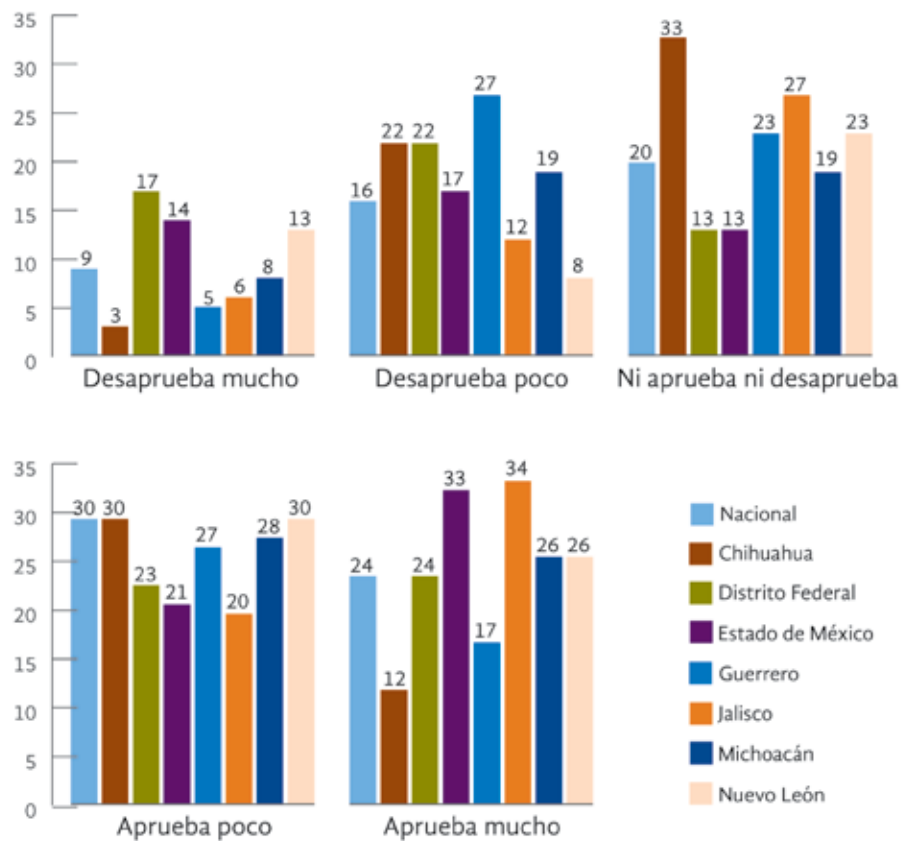
De acuerdo con los datos recabados en la Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011*, más de la mitad de los mexicanos están de acuerdo con las acciones del gobierno para combatir el narcotráfico (54%), frente a un cuarto de ellos que se manifiesta en contra (25%). La distribución interna de estos datos muestra que el 24 por ciento de los encuestados aprueban mucho la estrategia, 30 por ciento la aprueban poco, 9 por ciento la desaprueban mucho, 16 por ciento la desaprueban poco y 20 por ciento ni la aprueban ni la desaprueban. Si bien estos números nos hablan de una media nacional, la primera intuición es buscar diferencias regionales que maten esas cifras. Sin embargo, cuando se analizan las diferencias entre estados

¹ Directora asociada, SIMO Consulting.

² Director asociado, SIMO Consulting.

y regiones se observa que los niveles de aprobación no se encuentran tan alejados de la media nacional, siendo quizá Chihuahua y el Distrito Federal los sitios en donde existen los niveles más bajos de aprobación a la estrategia, con 42 por ciento y 47 por ciento respectivamente. Bajo este mismo criterio, donde sí encontramos diferencias importantes por estado es en los niveles de desaprobación. Claramente el Distrito Federal es la entidad que cuenta con el mayor porcentaje de ciudadanos que desaprueba la manera en que el gobierno combate al narcotráfico, con un 39 por ciento de encuestados que se manifiestan en este sentido, seguido por el Estado de México y Guerrero, ambas entidades con 31 por ciento de ciudadanos que desaprueban la estrategia. Un punto que resulta importante destacar es que, con la excepción de Guerrero, la mayoría de los ciudadanos que desaprueban esta estrategia son residentes del centro del país, en particular de la mancha urbana que se extiende desde la ciudad de México hacia la periferia, incluyendo ciertas zonas de los estados aledaños. En el resto de las regiones y entidades federativas, aun cuando los niveles de aprobación no sean altos –como en el mencionado caso de Chihuahua–, los niveles de desaprobación tienden a estar muy cercanos o por debajo de la media nacional (25%).

Cuadro 1
¿Usted qué tanto aprueba o desaprueba las acciones del gobierno para combatir al narcotráfico?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

Los que están a favor y en contra

Con la intención de tener una radiografía de los factores que moldean la opinión pública en torno al tema del combate al narcotráfico, más allá de las diferencias regionales, se analizaron los patrones demográficos, ideológicos y partidistas que comparten el 54 por ciento de los ciudadanos que aprueban la estrategia del gobierno federal. En primer lugar, los resultados muestran que existe una alta correlación entre la identificación partidista y la aprobación de la estrategia, pues el 43 por ciento de las personas que se definen a sí mismas como “muy panistas” son también quienes “aprueban mucho” la estrategia federal, seguidos por aquellos que se definen como “muy priístas”, de los cuales el 37 por ciento también “aprueba mucho” la estrategia contra el narcotráfico, lo cual contrasta con sólo el 24 por ciento de aquellos que se definen como “muy perredistas” y “aprueban mucho” la estrategia.

En segundo lugar, destaca el hecho de que a mayor escolaridad mayor es la propensión a apoyar la estrategia. Esta tendencia es clara particularmente en los niveles más altos de escolaridad, entre los ciudadanos que cuentan con grados universitarios, incompletos o completos, e incluso con posgrado, pues entre estos segmentos poblacionales el nivel de aprobación a la estrategia es de 62 por ciento, 60 por ciento y 80 por ciento respectivamente, mientras que las personas con primaria completa e incompleta están más cerca de la media poblacional de 54 por ciento, con 58 y 57 por ciento. Finalmente, cuando se analiza por rangos de edad tenemos que las personas que más aprueban la estrategia están entre los 45 y los 59 años, seguidos por los ciudadanos que están entre los 35 y los 44 años. Por género no existen diferencias significativas en este sentido.

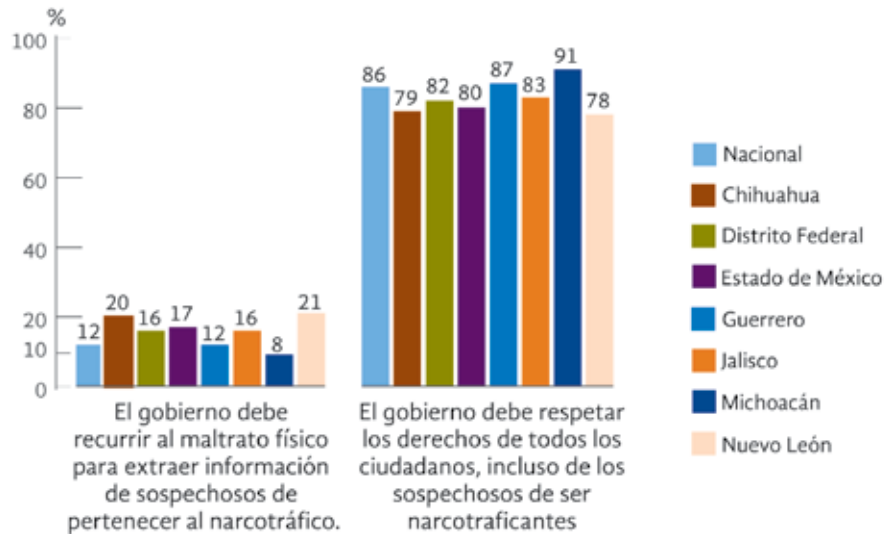
Al hacer este mismo ejercicio entre los ciudadanos que “desaprueban” la estrategia de combate contra el crimen organizado encontramos que el 43 por ciento de los encuestados que se definen a sí mismos como “muy perredistas” desaprueban la estrategia, seguidos por el 33 por ciento de aquellos que se consideran “algo perredistas”. En cuanto a las características demográficas destaca que los mexicanos con niveles de educación media alta; es decir preparatoria completa e incompleta, son los más proclives a estar entre el grupo que desaprueba, pues el 33 por ciento de los mexicanos con preparatoria completa “desaprueban la estrategia”, mientras que el 28 por ciento de los que tienen preparatoria incompleta se pronuncian en este sentido. Por último, en cuanto a los rangos de edad, encontramos que los mexicanos entre los 18 y 24 años, junto con las personas mayores de 60 años, son los más proclives a “desaprobar” la estrategia seguida hasta ahora por en el combate al narcotráfico.

Libertades y derechos

La estrategia del gobierno para combatir al narcotráfico en nuestro país también ha puesto de relieve la capacidad de la población para adaptarse a una situación de violencia que la ha obligado, en algunos casos, incluso a modificar sus hábitos cotidianos y su lugar de residencia. El debate público ha abordado algunos de las decisiones que ha tenido que tomar

la población, sin embargo, hay cosas que pareciera que los mexicanos no están dispuestos a sacrificar en la lucha contra el narcotráfico: sus libertades y sus derechos.

Cuadro 2
Algunas personas piensan que es válido recurrir al maltrato físico en la guerra contra el narcotráfico



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

La Encuesta CIDENA 2011 plantea que la disyuntiva derivada de la estrategia para el combate al narcotráfico parece darse entre la batalla por establecer un Estado de derecho, a pesar de que pueda representar algunas trabas, o bien, ceder libertades hacia un Estado que podría incluso pensarse como autoritario. En un contexto en el que la población demuestra poca confianza en los cuerpos policíacos pueden entenderse los siguientes resultados: la mayoría de la población mexicana se manifestó de acuerdo con que debemos preservar las libertades y derechos alcanzados, aún si ello dificulta el combate al narcotráfico (86% a nivel nacional). Existe, sin embargo, un 12 por ciento que considera que es necesario recurrir al maltrato físico (tortura). Si bien es mucho menor a los que consideran prioritario proteger los derechos y las libertades, estamos frente a un segmento de la población mexicana que estaría dispuesto a sacrificar derechos. Este porcentaje nos obliga a pensar en los elementos detrás del mismo.

Esta situación, si bien es la tendencia nacional, tiene matices en estados que concentran algunos de los índices más altos de violencia como en Chihuahua, donde se incrementa el porcentaje de la población dispuesta a ceder libertades y derechos en esta batalla (33%, Cuadro 3). Esto contrasta con la situación de Michoacán, que si bien también mantiene altos niveles de violencia, sólo el 18 por ciento de su población está de acuerdo con perder

libertades y derechos y el 81 por ciento se niega a cederlos para facilitar la lucha contra el narcotráfico. La diferencia podría atribuirse quizás a un periodo de violencia más prolongado en Chihuahua, si se considera que con anterioridad al inicio de la estrategia de combate al narcotráfico este estado ya tenía serios problemas de seguridad.

El intercambio de seguridad a cambio de libertades, si bien no es aceptado por la gran mayoría de la población, es una situación que ya comienza a suscitarse en el país, aun si todavía no adquiere tintes alarmantes. No es ajeno a los medios de comunicación que en zonas consideradas como “rojas” las personas ya no salen de noche, evitan viajar en horarios y por áreas específicas, e incluso en algunos casos han cambiado su lugar de residencia. Quizás estos cambios en la dinámica cotidiana de la población no se consideran aún como graves, pero no dejan de ser una limitante al derecho de libre tránsito. Hoy estas situaciones no se visualizan como “ceder” libertades.

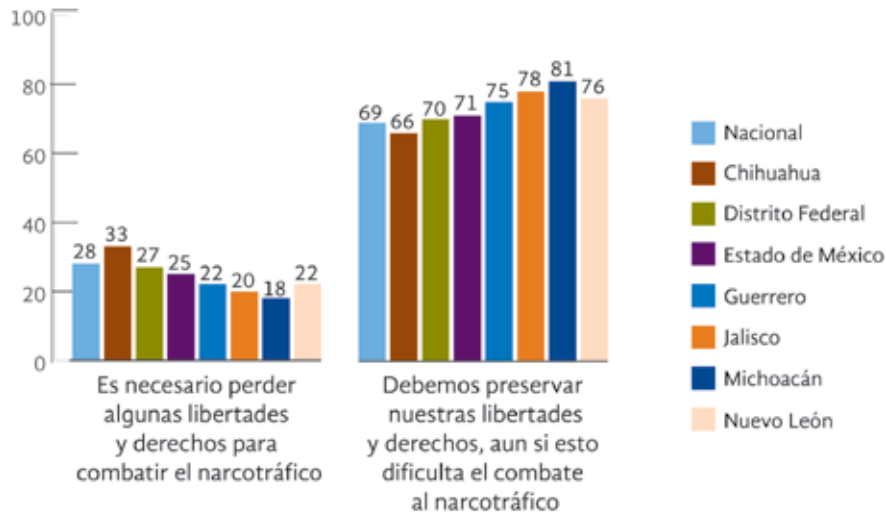
Derecho a la integridad personal

El derecho a la integridad personal es uno de los que, bajo los regímenes autoritarios y en situaciones de conflicto, tiende a ser vulnerado con mayor facilidad, por la tentación que representa recurrir al maltrato físico para obtener información. En México, este derecho ha sido consagrado en la Constitución y ha sido ratificado en varios tratados internacionales que nos integran a sistemas regionales e internacionales de protección a los derechos humanos. Con todo, hoy en día el 12 por ciento de los mexicanos están de acuerdo con que el gobierno debe recurrir al maltrato físico para extraer información de los sospechosos de pertenecer al narcotráfico.

De acuerdo con los datos el 86 por ciento de los mexicanos se manifiesta a favor de que el gobierno respete los derechos de todos los ciudadanos, incluso de los sospechosos de ser narcotraficantes. En específico, el estado de Michoacán es el que muestra un consenso más alto al respecto, pues el 91 por ciento de su población se manifiesta en este sentido, mientras que en el estado de Nuevo León es donde este consenso es más bajo, con un 78 por ciento que sostiene esta posición.

En la posición contraria, el grupo de los que están de acuerdo con que el gobierno utilice el maltrato físico para extraer información a nivel nacional representa el 12 por ciento de la población. A nivel estatal se observa que son Nuevo León y Chihuahua donde este grupo es más amplio, pues representan el 21 y 20 por ciento, respectivamente. ¿Quién conforma este sector poblacional? Más de la mitad (56%) son mujeres y el 42 por ciento son mayores de 48 años de edad. Coincide además que el 68 por ciento dice estar poco o nada interesado en la política. A este grupo se le señaló que esto significa que el gobierno podría violar los derechos humanos de gente inocente y se le preguntó si aun conociendo esta posibilidad seguiría apoyando el maltrato físico. El resultado fue que a nivel nacional, el 42 por ciento de quienes originalmente se posicionaron a favor del maltrato físico reiteraron su postura y el 54 por ciento desistió de ella. Esto significa que el 5 por ciento de la población mexicana se ha manifestado de acuerdo en el uso del maltrato físico por parte del gobierno como una forma de obtener información, y lo ha hecho de manera consciente.

Cuadro 3
¿Se deben preservar o sacrificar las libertades en el combate al narcotráfico?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

En un país con un sistema de justicia que todavía deja mucho que desear, que además está inmerso en una “guerra” en contra del narcotráfico que ha dejado más de 50 mil decesos, este dato puede pensarse como uno de los efectos colaterales de la violencia, o bien, como un déficit de la cultura de la legalidad en una nación en la que “una calentadita” no es un término difícil de escuchar en referencia a las detenciones. En cualquier caso, en una sociedad que busca ser democrática, como la nuestra, representa una asignatura pendiente.

Estado de derecho

El problema con la situación de seguridad que se vive en México consiste en que la opinión pública afecta, de forma ineludible y gradual, nuestras actitudes como ciudadanos y la relación con lo público, modificando nuestras demandas políticas e incluso alterando los valores ciudadanos, que son el eje rector de una democracia. Una situación que desgraciadamente en México comienza a presentarse.

Notas de prensa sobre linchamientos en algunas localidades del país y la evidencia de que en ciertas comunidades se han formado grupos de autodefensa, pagados directamente por la población, nos llevó a los coordinadores de la primera Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcotráfico* (CIDENA) 2011, a preguntarle a la gente su opinión al respecto. Los resultados, dignos de analizarse a fondo, muestran que en nuestro país las preocupaciones en torno al tema de la seguridad comienzan a tener un impacto sobre las concepciones

de lo que la gente considera “justo” o admisible, sobre todo cuando ello está directamente relacionado con su seguridad personal, pues frente a la pregunta: “¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que las comunidades se organicen para linchar delincuentes?”, 59 por ciento de la población menciona estar en desacuerdo, mientras que 40 por ciento declara estar a favor. Lo que sorprende de este dato es que aun cuando la mayoría de la población reprueba los linchamientos, un 40 por ciento de los mexicanos esté de acuerdo con que la gente tome la justicia por propia mano (Cuadro 4). De igual forma, al preguntar “¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que las comunidades se organicen en grupos de autodefensa?”, encontramos que 41 por ciento de la población rechaza esta medida, pero más de la mitad de los encuestados (58%) está de acuerdo con ella (Cuadro 5).

Cuadro 4

Algunas comunidades asediadas por la violencia han empezado a tomar justicia por su propia mano y han linchado delincuentes. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen para linchar delincuentes?

Algo o muy de acuerdo	Poco o nada de acuerdo
40%	59%

Cuadro 5

Algunas comunidades asediadas por la violencia del narcotráfico han empezado a organizarse para crear grupos de autodefensa. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen en grupos de autodefensa?

Algo o muy de acuerdo	Poco o nada de acuerdo
58%	41%

Aunque estos datos sólo son representativos a nivel nacional resulta evidente que existen ciertas tendencias regionales en cuanto a estas percepciones relativas a tomar la justicia o no por propia mano, o de intentar sustituir el monopolio legítimo de la violencia en manos del Estado. Por ejemplo, en los sitios en que los enfrentamientos con el crimen organizado han sido más frecuentes el apoyo a este tipo de actitudes aumenta, mientras que en zonas urbanas donde existen mayores niveles educativos y donde los enfrentamientos con la delincuencia organizada son muy escasos, o sólo se viven a través del flujo de información, ese apoyo disminuye. Sin embargo, a pesar de estas diferencias regionales es innegable que la violencia constante que se ha vivido en los últimos años comienza a afectar la visión del ciudadano común, debilitándose algunas de las premisas básicas que fundamentan todo Estado de derecho, como la confianza y la delegación

ciudadana en las instituciones públicas de impartición de justicia y salvaguarda de la seguridad.

Más que una crítica fácil a la “guerra” contra el crimen organizado, estos datos deberían servir para reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva la aplicación de la violencia legítima, sobre todo cuando se hace por periodos prolongados. Sin duda, convencer a la ciudadanía de que una “guerra” es justa es parte fundamental de la comunicación política de cualquier Estado, pero no puede ser lo único. Mostrar a la población en momentos de crisis que las instituciones se robustecen, que se trabaja por mejorarlas y que el respeto de la ciudadanía a ellas es fundamental y es lo que realmente permite ganar las guerras. La experiencia histórica internacional lo demuestra. Es ahí donde se necesita un verdadero *spin* en la opinión pública.
